



El rector de la UMH, la rectora de la UA y la consellera Carolina Pascual, en la presentación del Centro de Envejecimiento.

ANTONIO AMORÓS

## Hablemos de la Universidad



ANÁLISIS  
**Juan R. Gil**

Los centros públicos de enseñanza superior, los grandes ascensores sociales de la Democracia, no figuran en la agenda política, ni en la del Gobierno ni en la del Consell

**L**as universidades públicas de la provincia aprobarán sus presupuestos para el próximo ejercicio esta semana que entra. El lunes ha convocado a su consejo social la Miguel Hernández de Elche y el martes la de Alicante. Serán unos presupuestos contenidos, aunque no recesivos, que sin embargo no podrán responder a los grandes desafíos que ambos centros tienen que afrontar. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley orgánica de universidades recién cocinada, aunque aún no está en vigor, y a la que luego habrá que adaptarse. Una ley cuyo último texto ha generado la protesta unánime de los rectores y cuyo padre intelectual, **Manuel Castells** (de la cuota de Unidas Podemos, versión Co-

munes, facción **Colau**, disculpen el lío), acaba de dimitir del cargo de ministro que en realidad jamás fue capaz de asumir para ser relevado por un activista del procés con todo por demostrar en la materia para cuyo desempeño viajará de Barcelona a Madrid. Y porque, en lo tocante a la Comunidad Valenciana, seguimos sin un plan de financiación, más urgente si cabe ahora porque esa nueva ley de Universidades que está a punto de ser parida requiere de las aportaciones de las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias, para el cumplimiento de sus disposiciones, alguna tan ambiciosa como la que prevé acabar prácticamente con la eventualidad en el profesorado, ahora elevadísima. Pese a

ello, ese nuevo modelo de financiación de las universidades públicas de la Comunidad no parece estar entre las prioridades del Consell.

Y es que si hay algo que llama la atención en estos convulsos tiempos del covid es precisamente la ausencia de la Universidad de la agenda política. Aquí se habla de digitalización y de innovación, las más de las veces esgrimidos como fines en sí mismos y no como meras herramientas de transformación. O se habla de sostenibilidad, que también es un clásico. Son los mantras del momento, que todo político (sea alcalde, jefe del Consell, presidente del Gobierno o aspirante a cualquiera de estos cargos) introduce en uno de cada dos párrafos en todos sus discursos. Eso está de moda. Pero hablar de educación superior, no. Los expertos en marketing político no consideran que sea algo que venda, qué rollo. En todo caso, si se habla de universidades lo que mandan los actuales códigos es que sea para criticarlas, lo mismo por su pretendida endogamia como por su supuesta falta de conexión con lo que demanda la sociedad, una falacia para esconder lo que en realidad se quiere decir: que no responden suficientemente a lo que exige el mercado, lo cual no es lo mismo que lo que necesita la sociedad por mucho que la doctrina neoliberal nos quiera convencer de lo contrario.

Sostiene el sociólogo **Colin Crouch** que en las actuales sociedades «posdemocráticas» la primera línea de ataque al sector público siempre es la de fomentar un estado de opinión mayoritario que lo desprestigie. Para sustituir lo público por lo privado (digo sustituir, no encontrar un punto de convivencia, que sí es razonable) lo que hay que hacer es asentar el convencimiento de que lo público es ineficiente. Así que se dice por ejemplo que la Universidad es un refugio de vagos (pero casi ningún avance importante ha salido de alguien que no hubiera pasado antes o después por sus aulas), una fábrica de parados (pero la tasa de empleo entre los jóvenes no titulados en España es del 23% y la de los que sí estudiaron en la Universidad del 64%) y una insula incapaz de responder a las necesidades de las empresas en el marco de la nueva economía (pero nunca se pone el dedo en la llaga de los infrasalarios que la mayoría de esas empresas están pretendiendo pagar a jóvenes cuya formación nos ha costado a todos un riñón y que se convierten en mano de obra tan cualificada como miserablemente retribuida). La Universidad pública ha sido el mayor ascensor social en democracia. Degradarla en vez de promocionar su renovación es una grave irresponsabilidad.

Ese es el contexto general en el que estamos. Pero las dos universidades de la provincia tienen además problemas propios, que se verán acrecentados a partir de este año cuando la de Alicante deje de recibir los fondos extraordinarios que hasta aquí percibía por la llamada deuda histórica (el desequilibrio original entre la financiación que merecía y la que realmente recibió) y que le han servido hasta ahora para mantener unos niveles de servicio aceptables. Sin un plan de financiación adecuado difícilmente podrán afrontar la UA o la UMH, por ejemplo, el grave problema de envejecimiento del profesorado que arrastran (la media de edad entre los titulares de Alicante está en 59 años y el mismo problema padece en algunos estudios la de Elche). Tampoco tendrán recursos suficientes para mantener el nivel en el nuevo paradigma educativo que forzosamente in-

troduce la digitalización. Ni podrán incrementar los recursos destinados a la investigación. Todo lo cual repercutirá en un deterioro de su calidad y de su prestigio y relevancia. No es algo que les incumba a ellas, nos atañe a todos, porque es de la formación de nuestras futuras generaciones de lo que estamos hablando. Y del desarrollo venidero de Alicante. No hay ningún estudio serio que no considere, como uno de los dos mayores impulsores de la riqueza de esta provincia en el pasado siglo y lo que llevamos de este, la creación de la Universidad de Alicante. El otro es el aeropuerto. Cualquiera de los demás está a años luz.

Pero a pesar de su importancia, las universidades no están en el discurso político. No se habla de ellas en relación a los fondos europeos, por ejemplo. Lo que se hace es crear un organismo tras otro (Distrito Digital, Cenid, Centro de Envejecimiento, Fundación Ellis...), con su colaboración (o, más bien, con la utilización de su marca), pero en la práctica al margen de ellas. Y los titulares políticos de la cartera son tratados como responsables de segundo orden. Eso ha sido una constante en los gobiernos de Madrid, con independencia de quien los desempeñara, y también en los de la Generalitat Valenciana. Para los sucesivos Ejecutivos autonómicos, las universidades han sido, como mucho, un territorio a cuyos habitantes había que seducir, en el caso de las de València (que cuentan con muchos casos de trasvases de las aulas a la Administración, incluido algún rector que cambió el tratamiento de magnífico por el de honorable señor que corresponde a los consejeros). O simple y llanamente un incordio, en el caso de la de Alicante (cuyos principales rectores, el que

la creó y el que la expandió, **Antonio Gil Olcina** y **Andrés Pedreño**, comparten el haber tenido que admitir por presiones políticas). Pero nunca han figurado como un eje esencial de sus discursos.

En el primer Botànic presidido por **Ximo Puig**, las Universidades cayeron en el saco sin fondo de la conselleria de Educación, que hasta hoy dirige el nacionalista **Vicent Marzá**. Perdonen pero no recuerdo si Marzá llegó a asistir a alguna apertura de curso en la UA o la UMH, lo que sé es que mantuvo en el ostracismo a su entonces directora general de Universidades, la hoy senadora alicantina **Josefina Bueno**, a la que impidió desarrollar programa alguno sin que ni el secretario autonómico de la conselleria, **Miguel Soler**, ni el propio presidente Puig la respaldaran pese a haber sido el PSOE el que la puso ahí. En el Botànic II, que es el que ahora tenemos, la situación no ha mejorado, a pesar de que las Universidades están en otra conselleria, residenciada por primera vez en Alicante y cuya titular es la ingeniera ilicitana **Carolina Pascual**. València ha seguido imponiendo su peso y siendo cortejada por los políticos de todo color, mientras que Alicante cada vez queda más orillada. Pascual puede que quiera cambiar ese estatus, pero su falta de peso político (no milita en el PSOE, algo que le están haciendo pagar caro) la ha inhabilitado hasta el momento para ello. Pudo haber dado un golpe en la mesa cuando se produjo el atropello de la Agencia Valenciana de Innovación (recuerden, el 80% de sus millonarios fondos para proyectos van a parar a València, o-chenta), pero se demostró que ese funcionario llamado **Andrés García Reche**, convertido por Puig en virrey que no da cuentas a nadie (¿alguien sabe lo que ocurrió con la petición de explicaciones que el PP tramitó en las Corts o **Mazón** coincide con el Botànic en no tener prisa?), ese tercer vicepresidente sin nombramiento en el DOGV pero con dinero de sobra para repartir, digo, quedó claro que mandaba más que ella.

Veremos qué pasa en este próximo curso, en el que la primera mujer rectora de Alicante, **Amparo Navarro**, será también la que presidirá por turno la conferencia de rectores de la Comunidad Valenciana. En el que las universidades alicantinas ya están avisadas para no sufrir más atracos de la AVI. Y en el que igualmente se visualizará el frente común que la UA y la UMH están dispuestas a hacer para que el necesario plan de financiación de las universidades valencianas vea por fin la luz y contemple, además, factores territoriales que corrijan la política seguida hasta aquí de dar más al que más tiene, perpetuando los desequilibrios. Veremos también qué pasa con las titulaciones y si el Consell sigue bloqueando, para alborozo de la oposición, la recuperación de los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante. Que el PP, Ciudadanos y Vox, que defienden la congelación de lo público y la ampliación de lo privado, no tengan interés alguno porque Medicina vuelva a cursarse en Alicante, además de mantenerse por supuesto en la UMH, es lógico y resulta coherente con los programas con los que concurren a las elecciones. Pero que la izquierda vote esos estudios ahora, cuando sabe a ciencia cierta que el día que deje de gobernar llegarán a la provincia de la mano de las universidades privadas que ya estuvieron a punto de instalarse en la última legislatura en que gobernó el PP, no hay quien lo entienda. ¿Estamos tontos, o qué?

---

**La UA y la UMH aprobarán la próxima semana unos presupuestos que no les permitirán afrontar los importantes desafíos que tienen por la falta de una financiación adecuada**

---

**El próximo año será Amparo Navarro la que presidirá la conferencia autonómica de rectores y las universidades de la provincia ya están avisadas para frenar a García Reche**

---

**¿Seguirá bloqueando el Consell que pueda impartirse Medicina en Alicante a pesar de saber que las universidades privadas están esperando que gobierne el PP para instalarse?**